



RECTORIA

MUSEO
DE
CIENCIAS

137



Universidad pública en la mira

HUMBERTO **MÁRQUEZ COVARRUBIAS**

El proyecto neoliberal acomete la mayoría de los ámbitos de existencia y la educación es uno de sus principales objetivos. La privatización de la educación pública deviene de una política internacional que intenta vincular las normas financieras y comerciales con las prácticas educativas y culturales. Diversos organismos, instituciones y estados impulsan un programa de reformas dirigido a formar mercados de servicios educativos, flexibilizar las relaciones laborales, orientar los planes de estudio acorde a la iniciativa privada e implantar sistemas de becas y préstamos en detrimento del financiamiento público.

A nivel mundial se dibujan los contornos de un capitalismo cognitivo, donde prevalecen los intereses corporativos, merced a la tendencia de mercantilizar la educación y el conocimiento. En lugar de concebirse como bienes públicos, ambos componentes se presentan como meras mercancías y entonces funcionan de ese modo, cuando se lanzan al mercado para su venta. Una tarea primordial en la defensa y el fortalecimiento de la educación pública consiste en dilucidar qué son, cómo se forman y cómo se venden las mercancías educativas y cognitivas; asimismo, redefinir la educación y el conocimiento como bienes propios de la esfera pública y soportes esenciales de la reproducción social.

La historia reciente lo constata: la estrategia neoliberal consiste en atacar sin cuartel el ámbito de lo público hasta desacreditarlo, deteriorarlo y corromperlo. Una vez que se emite el diagnóstico sobre su estado de descomposición, los expertos y tecnócratas plantean una solución casi mágica, retomada del consenso de los organismos internacionales, la privatización, que promete impulsar la modernización y la eficiencia. El debilitamiento de las instituciones públicas procede eficazmente mediante el recorte presupuestal que merma el andamiaje institucional, vulnera el proceso educativo, desencadena conflictos internos y abre el terreno para la intervención de las políticas de mercantilización. Además, las crisis recurrentes se presentan como excusas oportunas para imponer programas de ajuste y restricción del gasto público en los rubros de desarrollo social, bajo la prédica de la austeridad, la cual no es aplicada a la creciente transferencia de recursos públicos al sector privado; lo mismo ocurre con el pago de deuda externa y los rescates a grandes empresas. El embate contra lo público no intenta debilitar al Estado sino fortalecerlo pues es necesario que respalde la expansión del capital mediante la formación, el soporte y el rescate de mercados preferenciales; pero en el terreno social se muestra como un Estado débil, incapaz de respaldar

a fondo actividades cruciales (es el caso de la educación).

Más allá de las fronteras del Estado nación, el contexto educativo está incrustado en la dinámica de la división internacional del trabajo. El modelo de desarrollo en México atiende a un esquema productivo dependiente basado en la oferta de trabajo barato, sobre todo de baja calificación. La fuerza laboral calificada egresada de las universidades enfrenta al desafío de trabajar en actividades mal remuneradas o ajenas a su formación, incluso se ve compelida a emigrar al extranjero, principalmente a Estados Unidos. En el rubro de «fuga de cerebros», México ocupa el sexto lugar mundial. Gran parte de los científicos, tecnólogos y profesionistas tiene que irse del país porque no encuentra empleo, lo que constituye un filón paradójico de la migración forzada.

La educación superior se vincula de manera cercana al mercado laboral y en México prevalecen condiciones degradantes de trabajo precario que demandan bajos niveles de especialización. Aunado a que el sector de educación superior no crece, los pocos egresados con grados de maestría y doctorado padecen altas tasas de desempleo. La economía ofrece un panorama sombrío para los estudiantes universitarios: se caracteriza por el estancamiento crónico y el recorte en el gasto. En consecuencia, no existen expectativas de empleo formal de calidad, lo cual es más frustrante para los egresados de posgrados que se supone podrían hacer mayores contribuciones al desarrollo nacional. Según la OCDE, las personas con licenciatura y posgrado presentan una tasa de desempleo mayor que aquellas desprovistas de educación universitaria.

Si bien aún no ocurre una privatización directa de las universidades públicas en México, sí hay una política velada de debilitamiento, estancamiento y abandono. México está a la zaga en la cobertura de educación superior con apenas 32 por ciento, mientras que

Cuba ostenta 95 por ciento y Venezuela 78 por ciento. No en balde cada año se verifican protestas de miles de estudiantes rechazados por las universidades mexicanas.

Hace tiempo comenzó la privatización generalizada de la educación superior, pero a diferencia de otros países, en México la mercantilización sólo se ha implementado de forma parcial, en virtud de la resistencia de los universitarios; sin embargo, sigue latente la pretensión de formar y ampliar un mercado de servicios educativos porque representa un gran espacio para los negocios. En tanto, no se abren nuevas universidades públicas y en general la matrícula no se eleva; el sector que se ha acrecentado es el de las universidades privadas, muchas de las cuales son consideradas «patito», es decir, poseen bajos niveles de calidad educativa.

De un modo indirecto la privatización educativa avanza a lomos, por ejemplo, de la llamada reforma educativa que dictaron los firmantes del «Pacto por México» y de una serie de acciones a su alrededor, que afectan directamente al nivel básico de la educación: cimbran las bases del sistema educativo con secuelas hacia arriba. Esta es una reforma laboral que embiste a la organización sindical y las condiciones laborales del magisterio, en consonancia con la reforma laboral precarizante para el resto de los sectores laborales supeditados a relaciones patronales empresariales. El golpe a la educación también ha tenido momentos de violencia desnuda, es el caso de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzincapa y el ataque frontal a las escuelas normales rurales.

En los niveles superiores de la educación mexicana se presentan escenarios de quebranto. El gobierno restringe el financiamiento de las universidades y la inversión en ciencia, tecnología y cultura. Los salarios y las prestaciones de los universitarios se erosionan y las becas estudiantiles son insuficientes. La matrícula

universitaria no crece y aumenta el rechazo de aspirantes. Tampoco crecen los posgrados y la generación de doctores es notoriamente insuficiente frente a la necesidad de la nación de disponer de personal con formación de alto nivel en las ciencias, las humanidades, las tecnologías, las artes, la cultura y la educación.

En contravención a las ideas de federalismo y autonomía, dentro de la astringencia financiera persiste, en términos significativos, una distribución desigual de los recursos. Por una parte, un núcleo de universidades y tecnológicos de la Ciudad de México, que por el hecho de estar asentado en la gran urbe centralizadora de los poderes cataloga a sus centros educativos como nacionales, concentra las mayores cuantías de recursos y dispone de posibilidades para ampliar y diversificar sus actividades e infraestructura; por otra parte, el resto de las universidades disgregadas en las entidades del país recibe magros recursos que en

definitiva impiden el crecimiento, debilitan la estabilidad institucional y dictan una condena sobre instituciones que desde las alturas son tildadas de pequeñas y localistas, incluso provincianas. No obstante, las autoridades universitarias dotadas de recursos suelen implementar campañas de publicidad a fin de enaltecer logros individuales de universitarios o la inclusión en *rankings* internacionales de algunas instituciones para justificar sus gestiones y promoverse como figuras destacadas de la clase política. El manejo mediático soslaya, cuando no encubre, los problemas estructurales de las universidades públicas, que incluyen desequilibrios y sesgos regionales. La diferenciación en el financiamiento público tiende a perpetuar el desarrollo desigual de las universidades y a relegar la incidencia de investigadores, profesores y estudiantes en el plano nacional, regional y local.

Para emprender la defensa de la educación superior es importante entender cuál es



la lógica de fondo de las políticas educativas que pretenden privatizar y mercantilizar la educación y el conocimiento. El problema no puede constreñirse a los apremios de la coyuntura, como el recorte en el presupuesto y la aplicación de programas de austeridad que derivan en diagnósticos inmediatistas sobre la crisis financiera de las universidades y los supuestos excesos del crecimiento; tampoco puede limitarse al trastocamiento de la gobernabilidad debido a los recurrentes conflictos internos y al consabido reparto de posiciones de poder burocrático. Es indispensable emprender una revisión a detalle de la política de educación superior en México en el contexto de un mo-

delo de desarrollo en crisis y además examinar la situación de las universidades en todos los estados, puesto que en un país con más de 120 millones de habitantes dispersos en un amplio territorio no pueden prevalecer políticas centralistas y elitistas. La educación pública es una pieza clave para formar nuevas generaciones de profesionistas, científicos, tecnólogos, intelectuales, artistas y creadores que podrán contribuir al desarrollo nacional. Pero cuando se estrangula a la educación pública se condena al país a perpetuar las condiciones de subdesarrollo. De ahí la necesidad de brindar un gran soporte al proceso educativo del sector público bajo otras directrices.

Lectura recomendada



La economía de la sociedad capitalista y sus crisis recurrentes

Guillermo Foladori | Gustavo Melazzi

Universidad Autónoma de Zacatecas

Zacatecas, 2016

Vivimos inmersos en una crisis permanente del capitalismo. Los economistas se debaten por explicarla con argumentos simplistas y sin llegar a acuerdos. Se culpa a otros países por haberla generado, a los políticos por no saber administrarla, a los ejecutivos por sus altos sueldos, a los trabajadores por exigir aumentos salariales. Las propuestas para superar la crisis repiten fórmulas conocidas: limitar el gasto del Estado, facilitar el ingreso del capital extranjero, congelar los salarios. Tras la recesión de 2008 la revista *Time* sugirió leer *El Capital*, de Karl Marx, para entender sus causas estructurales. Siguiendo la trayectoria de la crítica de la economía política, este libro esclarece las principales categorías expuestas en *El Capital*. El conocimiento de las principales categorías económicas,

aunado a su encadenamiento y desarrollo que muestran el funcionamiento del sistema capitalista, es de imprescindible importancia para lectores interesados en la economía y la política contemporáneas, además permite analizar críticamente gran parte de la literatura sobre desarrollo, que de modo invariable recurre a los postulados marxistas a fin de comprender la realidad. La tesis central de *La economía de la sociedad capitalista y sus crisis recurrentes* ha sido examinada durante varias décadas de docencia universitaria y seminarios con trabajadores en diversos países. Luego de más de siete ediciones agotadas en español y una en portugués, la presente constituye una reciente ampliación y revisión que incorpora un capítulo acerca de la crisis contemporánea.